



El problema tras el escándalo de las subvenciones

Febrero 2008 parece repetir la historia de un año atrás, pero esta vez con más bombos y platillos.

Los eximios ilusionistas de la derecha cada día hacen saltar una nueva liebre que mágicamente aparece de sus sombreros: acusaciones de corrupción y mal uso del dinero de las subvenciones por parte del Ministerio de Educación y de distintas seremías, falta de control de las matrículas y asistencia de los alumnos para asignar subvenciones.

Estos mismos ilusionistas no han tenido la misma habilidad para hacer saltar las liebres y conejos que se han llevado, con toda seguridad, mucho más que 262 mil millones de pesos. Me refiero a los millones de millones de recursos de las subvenciones que, con el aval de la ley, nos han robado a los chilenos para consolidar pingües negocios y adquirir suntuosas propiedades, cadenas de establecimientos, inmobiliarias diversas, etc.

Es esta misma derecha acusadora la que aplaudió y avaló que la dictadura instaurara por la fuerza, a partir de los ochenta, la privatización y mercantilización de la educación. Hay que decir, sin embargo, que los gobiernos de la Concertación, lamentablemente, han navegado por las mismas aguas, profundizando el sistema, permitiendo que se siga privatizando al relegar cada vez más al Estado a un mero papel regulador del mercado, por lo demás bastante ineficiente.

De esos dineros que "legalmente" van a parar a muchos bolsillos privados nadie se pronuncia. Del actual sistema de financiamiento, que posibilita la corrupción, que el movimiento estudiantil abogó se terminara al demandar el término del lucro con dineros del Estado, nadie dice nada. Porque podrá haber muchas renunciaciones y acusaciones constitucionales y el problema, si no se ataca a fondo, continuará exactamente igual.

Los sólidos argumentos y propuestas del mundo social, de respetados investigadores y académicos, e incluso de políticos de la Concertación, que se entregaron en el Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, el Gobierno los desechó, pactando con la derecha para mantener el sistema. Así parece probarlo, además, la reciente Ley de Subvención Preferencial, que entregará mucho mayores recursos manteniendo intacto el lucro con dineros públicos.

Extraño país el nuestro. Es el único con un sistema de vouchers que financia del mismo modo la educación pública y la privada; el único donde se permite lucrar con dineros públicos; el único donde ya cerca del 50% de la educación está en manos privadas que, tras el concepto de libertad de enseñanza, lo que ejercen es la libertad de hacer negocios con la educación.



Pero el problema no es sólo de recursos. Este sistema ha significado que nuestra educación sea una de las más inequitativas y fragmentadas del planeta. Con recursos de todos los chilenos, con la tan bendecida subvención, no sólo los privados hacen sus negocios, sino que muchos alcaldes la utilizan para pagar favores políticos.

Perlas de un sistema injusto constituyen, por ejemplo, el que los municipios más pobres de nuestro país reciban menos subvención porque los alumnos que estudian en esas comunas tienen menos asistencia y, por tanto, allegan menos recursos. Injusticia es también que los establecimientos privados continúen seleccionando a sus alumnos, obteniendo, por tanto, supuestamente mejores resultados, y así reciban premios y estímulos y más recursos. En cambio, los que no seleccionan son castigados.

¿Es ésta la reforma exitosa de la que nos habla el señor Viera-Gallo? ¿Éste el sistema que defiende el ministro Vidal?

¿Seguirán primando los intereses económicos y políticos detrás de empresarios educacionales, alcaldes y concejales? Y aquí no se salva la derecha ni muchos personeros de la Concertación, que continúan avalando un sistema que propicia el negocio por sobre la educación de calidad como derecho.

Pareciera que son estos intereses los que impiden avanzar en cambios estructurales que, definitivamente, terminen con el lucro, instalen un sistema de financiamiento para el sector público que responda a las necesidades de la población que atiende, y terminen con la municipalización/alcaldización de la educación, para construir un sistema descentralizado de responsabilidad estatal y pública.

¿Habrà que esperar nuevos escándalos y denuncias en febrero 2009, o tendremos que aguardar una nueva revolución pingüina para impulsar los cambios estructurales que nuestra educación requiere?